

¿Puede España transformar su economía?

PRUEBA CRUCIAL/ El plan del Gobierno supone una prueba fundamental para el fondo de 800.000 millones. Su éxito podría contribuir a aumentar la estabilidad de la eurozona. “Hay que europeizar el mercado laboral español”, apunta Calviño.

Daniel Dombey/Ben Hall.

Financial Times

En marzo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el Rey Felipe VI visitaron la planta de Seat en Barcelona para mostrar su apoyo a la fabricación de vehículos eléctricos con la que el país espera modernizar y preservar su sector del automóvil, vital para la economía. El proyecto es una pieza fundamental de los planes de España para invertir los 70.000 millones de euros de ayudas del fondo de recuperación de la UE. Aunque la visita parecía una inauguración, el Gobierno tardó cuatro meses en dar su aprobación formal al proyecto. A pesar de que España tiene prisa por gastar el dinero, los retrasos en el proyecto del vehículo eléctrico son una de las varias incógnitas que se ciernen sobre lo que, según Sánchez, es el programa de transformación económica “más ambicioso” de la historia moderna del país y la mayor oportunidad desde su ingreso en la Comunidad Europea hace 35 años.

El plan de España es también una prueba de fuego para el programa global de recuperación de la UE, dotado de 800.000 millones de euros, una apuesta por la modernización de la economía europea y la mayor integración, cuya ejecución representa quizá el mayor desafío al que se enfrenta el bloque.

El Gobierno español afirma que su plan nacional, que incluye 110 inversiones y 102 reformas, creará 800.000 puestos de trabajo durante los próximos tres años mediante la inversión en tecnología verde, digitalización, educación y formación.

“Es fundamental que recibamos esos fondos en este momento”, sostiene la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que reconoce que el país aún está lidiando con la “resaca” de la brutal contracción del 11% del PIB que sufrió la economía en 2020.

Montero añade que “para nosotros los fondos europeos son una ayuda fundamental, no sólo para acelerar la recuperación económica, sino para lograr un programa de transformación. Estos recursos nos permitirán materializar el cambio”.

En teoría, los grandes beneficios llegarán a largo plazo y dependen más de las reformas económicas que de la inversión. Según cálculos del

Gobierno español y la Comisión, las reformas en ámbitos como el mercado laboral, la fiscalidad y las pensiones podrían impulsar la economía entre un 8% y un 10% en 20 años. También hay mucho en juego para la UE. El plan de España es el segundo más grande de la UE, después del de Italia, y asciende a 140.000 millones de euros, incluidos los 70.000 millones de euros en préstamos que se espera que España solicite en los próximos dos años.

Más integración

Si el fondo de recuperación de 800.000 millones de euros –que se financia con la emisión de deuda común de la UE– se considera un éxito, podría allanar el camino hacia una eurozona más integrada y estable, con un mecanismo permanente de préstamo en tiempos de crisis y una unión bancaria. Si fracasa, el progreso hacia la cohesión de la UE podría detenerse definitivamente. España supone un ejemplo de vital importancia.

Algunos críticos ya advierten de que el país puede estar a punto de perder su oportunidad histórica debido a la politización de las inversiones y a las reformas poco entusiastas. Acusan a España de utilizar el dinero para acelerar la recuperación de cara a las elecciones de 2023, en lugar de financiar las reformas necesarias para aumentar la productividad.

“Necesitamos un plan de reformas y, en cambio, estamos viendo un plan de contrarreformas”, manifestó el mes pasado Mariano Rajoy, expresidente del Gobierno.

En contra del consejo inicial de la Comisión Europea, España pretende adelantar los fondos y gastará el 77% de sus ayudas en los próximos tres años.

“Intentamos equilibrar los planes de inversión a largo plazo y la transformación de la economía con las necesidades diarias”, sostiene Manuel de la Rocha, principal asesor económico de Sánchez, que supervisó la presentación del plan a Bruselas. “No podemos esperar tantos años para gastar el dinero, porque la gente necesita empleo ya”, añade.

Aunque la mayor parte de los recursos no empezarán a llegar a los beneficiarios hasta el año que viene, ya se han detallado las principales prioridades de gasto. Incluyen



Paolo Gentiloni y Nadia Calviño, ayer en la visita a uno de los proyectos del Plan de Recuperación en la Estación de Chamartín de Madrid.

3.000 millones de euros en fondos públicos para la iniciativa del coche eléctrico, un plan de 7.000 millones para aumentar la eficiencia energética de los edificios y 3.500 millones para ayudar a un millón de pymes a digitalizarse.

En opinión de Nadia Calviño, vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, “hemos avanzado muchísimo, teniendo en cuenta que fue en julio del año pasado cuando los líderes de la UE acordaron crear el plan. En términos de plazos históricos, el avance es realmente notable”.

Transformación

Calviño explica que el objetivo central del plan es “emprender un proceso de modernización transformadora” que impulse el crecimiento y aumente su resistencia a medio y largo plazo, y añade que el programa “alcanzará velocidad de crucero el próximo año”.

Pero, a diferencia de Italia, donde el Gobierno de unidad nacional ha forjado un consenso en torno a sus planes, el polarizado debate político de España impide que haya un acuerdo nacional sobre el uso de los fondos.

Pablo Casado, líder de la oposición, argumenta que el control del presidente del Gobierno sobre los recursos podría llevar a un “clientelismo que acabe en corrupción”. En

El polarizado debate político impide que haya un consenso nacional sobre el uso de los fondos

una entrevista concedida a *Financial Times* este año, Casado declaró que “las empresas sacan del cajón proyectos que no son rentables, y el Gobierno dice: *Dadme proyectos para que pueda justificar los fondos europeos*. Es una irresponsabilidad”.

Aunque las comunidades autónomas gestionarán aproximadamente 22.000 millones de euros de los 70.000 millones de subvenciones, Javier Fernández-Lasquetty, el consejero de Hacienda de la Comunidad de Madrid, se queja de que tiene las manos atadas hasta en los programas de menor presupuesto.

En el caso de Madrid, estos incluyen 2 millones de euros que el Gobierno central ha asignado a una inversión para un “centro audiovisual” y 600.000 euros para la transformación medioambiental y digital del sector agroalimentario y pesquero de la región sin litoral.

No obstante, aunque los detractores lamentan que el Gobierno tenga el control total de la asignación del fondo, con escasa participación de los partidos de la oposición o de las 17 autonomías, tanto el Go-

bierno como la Comisión sostienen que estará sujeto a duros controles externos.

Las autoridades españolas recuerdan que han resistido la presión de Bruselas de participar en la gestión del uso de los fondos y afirman que la condicionalidad impuesta por la UE no tiene precedentes. La condición fundamental para que los fondos sigan llegando es que España cumpla su palabra de llevar a cabo reformas, especialmente en algunas de las partes más sensibles de la economía.

El plan español fue uno de los primeros en recibir la aprobación oficial de Bruselas. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, lo ha calificado de “ambicioso y con visión de futuro”. A los escépticos les preocupa que la condicionalidad del programa de la UE –que incluirá 70.000 millones de euros de préstamos en 2024-26, además de una cantidad equivalente de subvenciones durante los tres primeros años– sea menor de lo esperado.

Al principio, los Estados del norte de la UE intentaron reducir el tamaño del fondo de recuperación alegando que las subvenciones serían un desperdicio. Adriaan Schout, del Instituto de Relaciones Internacionales de los Países Bajos, afirma que el plan de España es muy diferente al de la Italia de Mario Draghi.

“Hace una década, España

fue un ejemplo por la forma en que se reestructuraron sus bancos. Sin embargo, eso fue hace una década. Ahora, la Italia de Draghi ha cogido velocidad y los objetivos de su plan nacional de reformas son más concretos”, añade. Zsolt Darvas, del centro de estudios Bruegel, afirma que España sólo recibirá ayudas de la UE si cumple los objetivos de las reformas laborales y de las pensiones que se han establecido junto con la Comisión.

Riesgo y deuda

España podría enfrentarse al riesgo de un aumento del coste de la deuda el próximo año si los inversores perciben que el Ejecutivo no ha avanzado mucho en las reformas y tiene dificultades para reducir su déficit justo en el momento en que el BCE comienza a reducir sus compras de deuda pública de la eurozona. Ese escenario de castigo es su “peor pesadilla. Éste es el gran riesgo al que se enfrenta el país”, sostiene un alto cargo español.

Uno de los grandes retos ya se ha aplazado hasta el año que viene. Dado que la deuda pública se disparó del 95% al 120% del PIB durante la crisis, España sólo tomará medidas para situarse en la senda de la sostenibilidad tras la elaboración de un informe sobre este asunto que elaborará un grupo de expertos, y cuya publicación está prevista para febrero. Pero Bruselas ha exigido